



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA  
Y ELECTORAL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
NÚMERO: 1322/2012

ACTORA: JOSÉ ARTURO PATRÓN MARQUEZ

AUTORIDADES DEMANDADAS: 1)  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS y 2)  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ambas  
del MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MAGISTRADO PONENTE: RIGOBERTO ALONSO DELGADO

Aguascalientes, Ags., treinta y uno de octubre de dos mil doce

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de nulidad número 1322/2012 y

#### RESULTANDO

I.- Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del Poder Judicial en el Estado, el veintiuno de agosto de dos mil doce, y remitida a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, JOSÉ ARTURO PATRÓN MARQUEZ compareció a demandar la nulidad de dos multa(s) de tránsito a que se refiere la(s) boleta(s) de infracción número(s) de folio 051477-1 y 041893-1; de fecha(s) 04/08/2010 y 30/05/2011 respecto al vehículo con placas de circulación número AD00537, según relación publicada en la página de internet del Municipio de Aguascalientes, por la cantidad de \$1,423.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.), ofreciendo al efecto las pruebas a que se refiere en la propia demanda.

II.- Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil doce, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte actora, teniéndose por admitidas las pruebas ofrecidas y ordenando el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

III.- Al producir la contestación a la demanda la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA y SECRETARÍA DE

FINANZAS PÚBLICAS ambas del MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, se opusieron a la nulidad planteada sin exhibir las documentales que justifican el acto impugnado; por lo que se dictó acuerdo señalando fecha para la celebración de la audiencia de juicio, la cual tuvo verificativo el día veintitrés de octubre de dos mil doce, misma fecha en que se citó el asunto para sentencia definitiva, que hoy se dicta, y

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO.**- Esta Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33F, FRACCIÓN I de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugna una resolución emitida por autoridades del Municipio de Aguascalientes, que el particular afirma le afecta en su esfera jurídica.

**SEGUNDO.**- La existencia de la resolución impugnada, se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y 47, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, y 341, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes de aplicación supletoria, con la afirmación que respecto a su existencia realiza el actor, sin que las autoridades demandadas se hubieren inconformado, por lo que se tiene por cierta la existencia del crédito fiscal impugnado.

**TERCERO.**- Que la acción de nulidad ejercitada por la parte actora es procedente por lo siguiente:

Al formular su demanda, la parte actora, manifiesta que se enteró de la existencia de la(s) multa(s) de tránsito impugnada(s), al consultar la página de internet del Municipio de Aguascalientes, pero que al desconocer el origen o motivo de la(s) misma(s), solicita se requiera a la referida autoridad por la exhibición de los documentos en



los que consta la(s) resolución(es) impugnada(s), y por ende, se reserva el derecho a formular nuevos conceptos de nulidad al momento de ampliar su demanda.

Para dar respuesta a la nulidad solicitada por el actor, conviene señalar que en el juicio contencioso administrativo, existe la figura de la *ampliación de demanda*, en aquellos casos en los que el demandante afirma desconocer el acto o resolución y pide, se requiera a la autoridad demandada por la exhibición de dicha documental, a fin de estar en aptitud de expresar los conceptos de nulidad una vez conocidos los fundamentos y motivos de dicho acto administrativo, tal y como lo establece el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:

*“ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.*

*...  
Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:*

*II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y*

*...”*

Si bien es cierto que en el presente caso, la(s) autoridad(es) demandada(s) dio(eron) contestación a la demanda interpuesta en su contra, no menos cierto lo es que omitió(eron) acompañar a su contestación la resolución determinante del crédito fiscal impugnado; ello no obstante a que fue(ron) debidamente requeridas al ser emplazadas dentro del presente juicio; y por ende, debe interpretarse que es a la autoridad demandada a quien debe atribuírsele la falta de resolución o acto administrativo que pueda ser objeto de análisis para determinar su legalidad,

Así, de lo anterior se advierte, que la autoridad demandada dejó en estado de indefensión a la parte actora, toda

vez que al no exhibir los documentos en los cuales constan las sanciones de multa impugnadas, le impidió que pudiera formular conceptos de nulidad que ataquen el fondo de dichas sanciones en ampliación de la demanda.

Es decir, la demandada hizo nugatorio el derecho del actor de verter conceptos de nulidad en contra del acto que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo, lo cierto es que la omisión de la autoridad de exhibir la constancia del acto impugnado, cuando le fue requerido por éste Tribunal en virtud de que el actor manifestó desconocer el acto, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que en el fondo, la autoridad demandada carece de elementos para sancionar al actor, por lo que al haber impuesto las sanciones impugnadas debe entenderse que se contravinieron las disposiciones aplicables o se dejó de aplicar las debidas, lo cual constituye una violación de fondo.

Por lo tanto, al haberse acreditado las violaciones de carácter formal, cometidas en los actos impugnados y haberse dejado en estado de indefensión al actor para formular conceptos de nulidad que ataquen el fondo del asunto, pues los hechos y fundamentos que motivaron las sanciones de multa impuestas no fueron conocidos por el actor por causa imputable a la autoridad demandada, en consecuencia, para evitar que el actor se vea afectado en su esfera jurídica ante la omisión de la autoridad demandada de exhibir las constancias del acto impugnado, aún cuando tenía la inexorable obligación de hacerlo, concluyendo al efecto como se dijo en el párrafo anterior en el sentido de que debe entenderse que se cometieron violaciones de fondo, lo procedente es que se declare la nulidad lisa y llana de los actos impugnados consistentes en las sanciones de multa impuestas al actor, a fin de no causar un estado de inseguridad jurídica



y lograr con ello la restitución del derecho afectado, rompiendo la indefinición derivada de la omisión y subsanando la indefensión en que quedó la parte actora con el actuar de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31, fracción II, 35, 37, 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo

Al respecto, el artículo 35, primer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el estado de Aguascalientes en lo conducente dice:

*“ARTICULO 35.- Admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le hubiese notificado el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda también será de quince días, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que, por las pruebas rendidas, o por hechos notorios, resulten desvirtuados”.*

**CUARTO.-** En virtud de la conducta procesal asumida por las partes, surte la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, y con fundamento en el diverso numeral 62 fracción II de ese mismo cuerpo de leyes, se declara la nulidad lisa y llana de la(s) MULTA(S) impuesta(s) por infracción a la Ley de Vialidad, misma(s) descritas en el resultando I de la presente resolución.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción 2ª./J. 173/2011 (9ª.) de la Décima Época, con número de registro 160591, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2645, cuyo rubro y texto dicen:

***“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.  
CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA  
EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS  
IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y  
LLANA.***

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que *si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas* por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, fracciones I, II y III, 61, fracción II y 62, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

**PRIMERO.-** La parte actora acreditó su acción.

**SEGUNDO.-** Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la(s) multa(s) de tránsito descrita(s) en el resultando I de la presente resolución.

**TERCERO.-** Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió ésta Sala Administrativa y Electoral del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el último de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en la lista de acuerdos con fecha cinco de noviembre de dos mil doce.- Conste



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA  
Y ELECTORAL

SALA ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.  
SENTENCIA DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 1322/2012

A continuación se estampan las firmas de los magistrados y de la Secretaria General de Acuerdos, quien a la vez

### CERTIFICA

Que las anteriores copias concuerdan fielmente con su original que obran en el expediente número 1322/2012, las que se autorizan para notificar a las partes. Va en seis páginas, a los treinta y uno días del mes de octubre de dos mil doce.- Doy fe

LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA  
ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS